

Santiago, diecisiete de abril de dos mil veinticinco.

Vistos:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma

Primero. Que en lo principal de su presentación de folio 569, Organización de Consumidores y Usuarios de Chile AC (ODECU) dedujo recurso de casación en la forma en contra de la sentencia dictada por el 22° Juzgado Civil de Santiago con fecha 21 de julio de 2023, alegando que concurren en ella vicios que acarrearán su nulidad.

En primer lugar, el vicio de *ultrapetita*, consagrado en el artículo 768 N°4 del Código de Procedimiento Civil, porque la sentenciadora habría resuelto algo diferente a lo pedido por la demandante, lo que quedaría de manifiesto en el Considerando Vigésimo Noveno de la sentencia, en el que sostiene que los trabajadores no podrían ser considerados consumidores, en circunstancias que ni la defensa de Bayer ni la de Arysta distinguen entre consumidores y trabajadores como destinatarios finales de las disposiciones de la Ley de Defensa de los Derechos de los Consumidores. Del mismo modo, porque el tribunal a quo habría reprochado a su representada en el Considerando Trigésimo, no haber demandado a todos los proveedores o distribuidores de Roundup, y solo a Arysta y Bayer, lo que tampoco habrían esgrimido los demandados.

Considera, de este modo, que la sentenciadora actúa fallando *ultra petita* “al utilizar argumentos no esgrimidos por las demandadas como argumentos centrales para rechazar la demanda de autos, como son la calificación de trabajador versus consumidor, excluyendo a estos de los primeros, y el hecho de no haberse demandado a todos los distribuidores o comercializadores del producto Roundup”.

En segundo lugar, la demandante esgrime que la sentencia incurre en el vicio de contener decisiones contradictorias previsto en el artículo 768 N°7 del Código de Procedimiento Civil, al resolver sobre la falta de legitimación activa de ODECU. Ello pues mientras que en los Considerandos Décimo Noveno a Vigésimo Quinto del fallo da por cumplidos los requisitos de legitimación que impuso el legislador en el artículo 51 letra b) de la Ley de Protección de Derechos de los Consumidores, en el Considerando Trigésimo Quinto habría creado una nueva categoría, que denomina “legitimación activa en cuanto al fondo”, la que no existiría en la ley o en la doctrina; de acuerdo



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QCCLXUTFYMX

con la que habría acogido la falta de legitimación activa opuesta por las demandadas.

Considera que las decisiones de la sentenciadora presentan una evidente contradicción “ya que en la primera parte del fallo recurrido pronuncia que los requisitos exigidos por la ley para que ODECU tenga legitimación activa se ha cumplido y declara que tiene legitimidad activa, para posteriormente, en la misma sentencia, niega la legitimidad activa de ODECU y rechaza la demanda basándose en este motivo”.

Argumenta que los vicios denunciados han causado perjuicio a los intereses de su representado, porque si la sentenciadora no los hubiere cometido habría acogido la demanda de autos, declarando que ODECU gozaba de legitimación activa, y que el ámbito de lo solicitado incluía también a los trabajadores que se vieron expuestos a Roundup y que a consecuencia de ello sufrieron linfoma no Hodgkin, a los que también debió otorgar las indemnizaciones y las prestaciones solicitadas en la demanda, así como sancionar con las multas pedidas a las demandadas.

Solicita se tenga por deducido recurso de casación en la forma y acogerlo, anulando la sentencia recurrida y dictando una de reemplazo que acceda a la demanda de autos, en todas sus partes; y, con expresa condena en costas.

Segundo. Que respecto de la primera causal, como bien se sabe, el vicio de ultrapetita se configura cuando la sentencia “otorga más de lo pedido por los litigantes o se extiende a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, esto es, cuando se aparta de los términos en que los interesados situaron la controversia a través de sus respectivas acciones o excepciones, altera su contenido, al cambiar su objeto o modificar su causa de pedir, de suerte que solo se configura si (...) rebasa el margen de las pretensiones formuladas en la fase de discusión” (Corte Suprema, 27 de febrero de 2025, rol 2168- 2025).

Para efectos de determinar el objeto debatido debe estarse a las pretensiones deducidas por la actora y contenidas en el petitorio de su demanda, así como a las contestaciones y los demás escritos de discusión.

Tercero. Que la recurrente argumenta que el vicio de ultrapetita queda de manifiesto en el Considerado Décimo Noveno de la sentencia, en que el tribunal habría utilizado dos argumentos que, en su entender, no habrían sido



invocados por los demandados; en concreto, que los trabajadores no podrían ser considerados consumidores, y que ODECU no habría demandado a otros proveedores o distribuidores de Roundup.

Como se advierte, lo que la recurrente dice modificado por el tribunal son argumentos que sirven para dotar de contenido la excepción de falta de legitimación activa que ambas demandadas opusieron en contra de la demanda presentada; de manera que no constituyen en sí mismas pretensiones independientes hechas valer, sino razones que sustentan una determinada decisión adoptada por el Tribunal.

De esta manera, su concurrencia –incluso de resultar efectiva– no tendría la aptitud ni el efecto de alterar el objeto del juicio ni lo debatido en él; de ahí que el hecho que el tribunal los haya considerado para adoptar su decisión no pueda estimarse constitutiva del vicio de ultrapetita.

Cuarto. Que bajo cualquier respecto, tampoco resulta efectivo lo afirmado por la recurrente, en la medida en que las demandadas plantearon expresamente los argumentos que ella da por inexistentes.

Para ello, basta con atender a la contestación de la demanda de Arysta, en que esta alega la falta de legitimación activa de ODECU en la medida en que sus clientes no son consumidores en el sentido del artículo 1 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, y lo mismo en cuanto reclama por la falta de legitimación pasiva de Arysta en la acción entablada.

Se concluye, del mismo modo, si se atiende a la contestación de la demanda de Bayer, quien alega que no existe una relación consumo que vuelva aplicable la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores al caso en examen, precisamente, porque no existen personas naturales o jurídicas que puedan ser calificadas como consumidores en los términos que define la mencionada ley; que no existe persona natural o jurídica que pueda ser calificada como proveedor en los términos que ella define, y que no existe un vínculo contractual calificable como acto de consumo. De lo anterior entiende que los demandantes carecen de legitimación activa, y ella de legitimación pasiva para ser demandados.

De lo anterior se advierte que ambos demandados cuestionaron que ODECU dispusiera de legitimación para obrar en estos autos, a nombre de consumidores, que es precisamente la excepción sobre la que se pronuncia



el Tribunal en el Considerando Vigésimo Noveno de la sentencia, al descartar que los trabajadores puedan ser considerados consumidores de acuerdo con la ley; y, representados, en dicha calidad, por la Asociación de Consumidores que incoa la acción.

Quinto. Que precedentemente razonado, se concluye que se advierte que no concurre, en la especie, el vicio de ultrapetita, toda vez que tanto desde un punto de vista abstracto como concreto, la sentencia, al resolver, se ajusta a los términos de la discusión planteada por las partes.

Sexto. Que por las mismas razones puede descartarse la pretendida ultrapetita fundada en que la sentenciadora habría reprochado a ODECU no haber demandado a otros proveedores o distribuidores de Roundup.

En efecto, si se examina el Considerando Trigésimo Noveno del fallo, se advierte que este es un argumento esbozado por la sentenciadora, para descartar la legitimación pasiva de las demandadas: de ahí que tampoco introduce una modificación al objeto del juicio y que pudiera configurar ese vicio de nulidad; razón por la que el recurso será desestimado por esta primera causal.

Séptimo. Que en lo que dice relación con el segundo de los vicios de casación; tal como ha señalado nuestra jurisprudencia, para que se configure de casación exige que la contradicción se produzca en la parte resolutive de la sentencia; y no en los considerandos que llevan a las referidas decisiones; contradicción que –de concurrir– podría configurar un vicio de nulidad diferente. En ese sentido ha señalado que “el vicio invocado se refiere a la hipotética situación de contemplar el mismo fallo impugnado dos decisiones que sean imposibles de cumplir porque una se opone a la otra, esto es, que existan dos dictámenes o determinaciones que recíprocamente se destruyen” (Corte Suprema, 6 de marzo de 2025, rol 1930-2025), lo que no se advierte en la especie en que se contiene una única decisión: a saber, el rechazo, sin costas, de la demanda deducida.

Solo a mayor abundamiento, cabe mencionar que tampoco se advierte contradicción entre los considerandos del fallo alegados por la recurrente. Ello porque el hecho de que la sentenciadora estimara que ODECU dispone de capacidad para obrar en el ejercicio de una acción para la defensa de intereses colectivos o difusos, no se opone a que carezca, en este caso



concreto, de legitimación activa para deducirla por ausencia de consumidores que constituyan ese colectivo.

Octavo. De lo que se ha indicado, resulta de manifiesto que no concurren en la sentencia los vicios de nulidad denunciados; de ahí que el arbitrio deba ser desechado, en todas sus partes.

II.- En cuanto al recurso de apelación

Se reproduce la sentencia apelada.

Y se tiene, además, presente:

Primero. Que se alza ODECU en contra de la sentencia argumentando que ésta yerra al acoger la excepción de falta de legitimación activa.

Dice que la decisión en cuestión es contradictoria con aquella que previamente adoptó el mismo tribunal al resolver sobre los requisitos de admisibilidad de la demanda colectiva y que se encuentran previstos en el artículo 52 letra b) y del artículo 51, todos de la ley 19.496

Argumenta que el tribunal, consideró que la demandante debía acreditar la representación de un número de afectados y el daño sufrido por ellos para contar con legitimación activa, más allá de las exigencias que impone el artículo 51.

Estima, a propósito de esta causal, que el tribunal debió limitarse a constatar tales requisitos, todos los cuales habrían sido cumplidos en la especie, y no a otros diversos; y que para resolver las alegaciones o defensas de las demandadas referidas a la representación de la Asociación de Consumidores y los intereses cuya defensa emprendía, bastaba con que hubiera aplicado el artículo 51 N°4 que dispone que, cuando se trate de una Asociación de Consumidores quien recurre, la demandante no requerirá acreditar la representación de consumidores determinados del colectivo en cuyo interés actúa. Estima, de este modo, que la sentenciadora le habría exigido ilegalmente agregar otro requisito de admisibilidad de su acción, consistente en acreditar una representación de intereses asociados a la demandante y los daños sufridos por los consumidores, en circunstancias que el legislador la eximió expresamente de ello.

Advierte, por consiguiente, un error de aplicación del artículo 50 de la Ley 19.496, porque, por principio de especialidad, simplemente debió aplicar el numeral 4 del artículo 51 de la Ley; por lo que concurre una errada



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QCCLXUTFYMX

aplicación de la ley que, por sí sola, le habilitaría para recurrir en contra del fallo.

En segundo lugar, la recurrente afirma que el tribunal yerra al exigir “al menos una representación sustancial” en el Considerando 35°, pues ese requisito es ajeno a la normativa de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, que entrega una legitimación activa extraordinaria a las Asociaciones de Consumidores dentro de las que se encuentra su representada.

Dice que los intereses colectivos o difusos son aquellos que corresponden a un conjunto de personas en una situación jurídica similar respecto de un potencial demandado que pueden ser resarcidos en un solo procedimiento, los que por razones de economía procesal o coherencia se agrupan en una clase que actúa como demandante en lo que se denomina “acción de clase”, y que para obtener los beneficios de agruparse requiere que se seleccione previamente quien la representará en el procedimiento adversarial. Señala que, en el caso chileno, es el legislador quien ha predeterminado por ley quienes pueden ser los representantes de una clase y, por tanto, quienes son legitimados activos para interponer una acción en protección del interés colectivo o difuso de los consumidores. De esta manera, la Ley chilena permite acceder al proceso a un número ilimitado e indeterminado de consumidores con el objeto de establecer, en una primera fase, las infracciones cometidas al ordenamiento jurídico vigente; para luego, en una segunda fase, los daños sufridos por ellos y en una tercera fase determinar los potenciales afectados. Por ello, considera que cuando una asociación ejerce una acción en estos casos, no lo hace en representación de cada uno de los intereses individualmente considerados, sino que lo realiza porque ostenta la representación institucional del conjunto, es decir, del interés colectivo. En esos casos, en su entender, la Asociación de Consumidores no deduce una pretensión en nombre propio afirmando derechos ajenos, sino que afirma, en nombre propio derechos propios, razón por la que no se trata de una hipótesis de legitimación activa ordinaria pues no se defienden intereses individuales, sino que intereses colectivos, lo que justifican la legitimación activa extraordinaria que le otorga la ley.

Estima que la sentencia le ocasiona agravio cuando, en el Considerando 34°, le exige un requisito no contemplado en la Ley 19.496



consistente en “una regulación sustantiva entre, al menos, algunos de sus miembros y la pretensión que reclaman”, error que dice incurrieron las primeras sentencias que fallaron juicios colectivos, pero que fueron posteriormente superadas por la jurisprudencia, la que dio cabal aplicación al artículo 51 N°4 de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores que excluye la representación de consumidores determinados tanto para el Sernac como para las Asociaciones de Consumidores.

Estima que la sentenciadora habría ido incluso más allá al exigir que se acredite una relación de consumo entre consumidores y proveedores, y que por ello analiza la situación de los trabajadores y de las Pyme, calificando de vaga su legitimación y reprochándole no haber exhibido una lista de consumidores que adhieran a esa pretensión, requisito que estima innecesario por expresa disposición de la ley.

Dice que lo anterior es equivocado porque las Asociaciones de Consumidores no tienen la obligación de tener un giro que coincida con las industrias que demandan, ni tampoco deben tener como asociados o estar relacionados con los afectados por un proveedor para tener una legitimación activa. Exigir lo anterior, en relación con lo fallado por el a quo, implicaría poner una barrera que no existe en la ley para que los afectados puedan solicitar compensación, en la medida en que ellos deberían organizarse para cada circunstancia de abuso.

Aduce que la “relación de consumo” es el concepto moderno y omnicomprendido de la relación entre consumidores y proveedores que abre la puerta a la protección del derecho del consumidor, y que el a quo habría obviado por completo. Que lo que determina que exista una relación de consumo es que exista un destinatario final del bien, y que, en este caso, tendrían ese carácter los que aplicaron el producto; pues de lo contrario deberían serlo los consumidores de vegetales que crecieron en la tierra donde se aplicó el herbicida, lo que sería absurdo.

Señala que la exigencia del tribunal a quo de exigir un contrato de consumo entre los consumidores y los usuarios demandados y las denunciadas, debe ser acreditado por quienes deban recibir los beneficios de la sentencia en una etapa posterior que contempla el mismo procedimiento colectivo, la que se establece en el artículo 54 de la Ley 19.496 y que,



respecto de ella, los interesados deben presentarse a ejercer sus derechos establecidos en la sentencia ante el mismo tribunal en que se tramitó el juicio.

Agrega que no corresponde exigir una relación contractual entre proveedor y consumidor, lo que sería contrario al propio espíritu de la ley, que es otorgar protección adecuada al consumidor como parte débil de las relaciones jurídicas con los proveedores; y que lo único relevante es determinar la relación de consumo.

En segundo lugar, la recurrente alega que la sentencia le ocasiona agravio en la medida en que le exige acreditar daño como requisito para la acción colectiva en esta etapa del juicio, estimando que carecería de “legitimación activa de fondo” en el Considerando Cuadragésimo Cuarto precisamente porque no habría acreditado en esta etapa el daño sufrido por los consumidores.

Estima que la transgresión que realiza a la Ley del Consumidor y a los fundamentos mismos del derecho del consumo como una disciplina con finalidad tutelar, le impide la ponderación adecuada de las pruebas que fueron ofrecidas por su parte referidas a los daños, las que además de demostrar su existencia, permiten establecer que existe un interés colectivo o difuso representado en juicio, que constituiría la legitimación de ODECU para demandar, sin que sea necesario precisar un listado de consumidores, y bastando las presunciones para estimar la plausibilidad de la existencia de daños sufridos por consumidores chilenos.

Considera que hay un conjunto de antecedentes que dan cuenta de la existencia de un interés supraindividual a proteger: la existencia de un producto potencialmente cancerígeno, cuyo uso se ha extendido en el tiempo en los campos y bosques chilenos, lo que revelaría que hay un grupo de usuarios afectados; que tiene una dimensión colectiva, respecto de aquellos usuarios de más fácil determinación, que son quienes utilizaban directamente el producto como destinatarios finales; pero también una dimensión difusa, consistente en quienes estaban expuestos al producto, sea por su aplicación directa o por estar emplazados, ya sea trabajando o viviendo, en su entorno. Distinguir entre ambos grupos y ordenar las subclases que fueran pertinentes sería una cuestión concreta que el tribunal evade con su errónea interpretación.



Segundo. Que se adhirió a la apelación Bayer S.A., solicitando la enmienda de la sentencia definitiva, a fin de que se declare como temeraria, la demanda deducida por ODECU.

Para tales efectos, argumenta que la sentencia recurrida rechazó, en todas sus partes; y, con costas, la demanda entablada por ODECU en atención a la inexistencia de las infracciones imputadas, así como en razón de la seguridad y cumplimiento regulatorio del producto Roundup, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 50 letra E de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores que permite que se declare como temeraria una acción, lo que se ve reafirmado por el artículo 52 de la misma ley, que faculta a ello cuando la demanda intentada carezca de fundamento plausible o haya sido deducida de mala fe, aplicando de este modo al recurrente las sanciones que esa misma disposición prevé.

Sostiene que, en el presente caso, concurren los dos supuestos por los cuales una demanda puede declararse como temeraria, en la medida en que ha sido deducida careciendo de fundamento plausible, y también de mala fe. La primera de ellas, pues la demandante no logró acreditar ni la existencia de consumidores afectados ni la peligrosidad del producto en circunstancias que se ha deducido acción para la protección del interés colectivo de los consumidores; y también de mala fe, pues ODECU buscó conectar con eventuales consumidores solo después de haberse declarado admisible la demanda, a través de una campaña mediática en la que entregó información falsa a personas que padecían de cáncer.

Tercero. Que, en segunda instancia, ODECU acompañó documentos a folio 4, en relación con los cuales se designaron peritos traductores, los que acompañaron sus traducciones a estos autos. Asimismo, ODECU acompañó a fojas 24 y 46, documentos que se agregaron a este expediente; y Bayer a folio 28.

Cuarto. Que el recurso de apelación deducido por ODECU se funda primero en el pretendido error de derecho en que habría incurrido la sentenciadora al exigir, para reconocer la legitimación activa de ODECU, un número de personas afectadas, además del daño que los mismos habrían padecido.

Para efectos de establecer la existencia del pretendido defecto, debe tenerse en cuenta que la sentenciadora, tras afirmar la concurrencia de los



requisitos exigidos para que ODECU comparezca en autos en el ejercicio de la presente acción, argumenta en los Considerandos siguientes sobre la existencia del interés colectivo o difuso que esta invoca y que dice representar.

Es así como en el Considerando Vigésimo Octavo señala que correspondía a ODECU demostrar los presupuestos requeridos para el ejercicio de una acción que tutela el interés colectivo de los consumidores, esto es, la existencia de un número determinado o determinable de estos y, en seguida, una relación contractual; estimando que en el presente caso no se satisfacen las referidas exigencias al no referirse a esta cuestión abiertamente el libelo deducido y al establecer, en lo que dice relación con el daño padecido, que se trataría de trabajadores que padecerían del linfoma no Hodgkin que habrían sido sometidos al producto, estimando que los referidos trabajadores no pueden revestir el carácter de consumidores en los términos que establece la ley. Asimismo, agrega el tribunal, tampoco pueden revestir ese carácter las micro y pequeñas empresas que han sido mencionadas de una manera indeterminada por la actora, como tampoco personas naturales, no habiéndose tampoco precisado un grupo de personas que podrían revestir esa calidad. En el Considerando Vigésimo Noveno se refiere a la improcedencia de que esta categoría se configure con los trabajadores que se habrían expuesto en sus labores y quehaceres al producto indicado, y en el Considerando Trigésimo, a la improcedencia de que sean representadas en juicio por ODECU empresas de menor tamaño a las que alude la Ley 20.416. En el Considerando Trigésimo Primero, alude a que no habría logrado demostrarse cuáles serían los consumidores afectados, pese a que ODECU habría efectuado una convocatoria pública para tales efectos. En los Considerandos Trigésimo Segundo y Trigésimo Tercero, se descarta la concurrencia del segundo de los requisitos exigidos por la definición de consumidor: la existencia de un vínculo contractual, incluso en los términos amplios en los que se encuentra definido por el legislador, estimando que, en este caso, no se dan los presupuestos para que se considere a ODECU como legitimada activa en relación con los intereses colectivos. En el Considerando Trigésimo Cuarto, por su parte, y en relación con el interés difuso, lo desestima, teniendo en cuenta la falta de precisión y antecedentes señalados en la demanda en relación con los grupos o subgrupos de



consumidores afectados, concluyendo en el Considerando Trigésimo Quinto que ODECU no tiene legitimación activa en cuanto al fondo, porque “si bien cumple con los requisitos formales establecidos en la LPDC para comparecer, no es menos cierto que debe existir una justificación de fondo, una representación sustancial que a lo menos entregue la circunstancia de los hechos, por lo que necesario resulta rechazar la demanda”.

Quinto. Que, para efectos de resolver sobre la primera alegación en que ODECU funda su apelación, conviene tener en cuenta que el estatuto de la Ley 19.496 hace posible el ejercicio de acciones para la tutela de intereses colectivos y difusos precisamente con la pretensión de facilitar el acceso a la justicia de determinados grupos de personas.

Se trata, no obstante, de un estatuto especial, lo que conlleva límites en lo que dice relación con la forma en que se encuentra conformado, que son aquellos que precisa la propia Ley 19.496, al señalar en su artículo 50 que “las denuncias y acciones que derivan de esta ley se ejercerán frente a actos, omisiones o conductas que afecten el ejercicio de cualquiera de los derechos de los consumidores”, y precisando en su inciso tercero que el ejercicio de las acciones puede efectuarse “en beneficio del interés colectivo o difuso de los consumidores”, entendiendo que son tales “las acciones que se promueven en defensa de los derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual”.

Las normas precitadas deben ser complementadas con aquella contenida en el artículo 51 de la misma Ley 19.496, de acuerdo con la cual la demanda en los referidos procedimientos debe ser iniciada por el Servicio Nacional del Consumidor, una Asociación de Consumidores constituida, a lo menos, con seis meses de anterioridad a la presentación de la acción, y que cuente con la debida autorización de su directorio para hacerlo, o por un grupo de consumidores afectados en un mismo interés, en un número no inferior a 50 personas, debidamente individualizados.

Como se advierte de los referidos enunciados normativos, la especialidad de las normas contenidas en la Ley 19.496 exigen que los intereses colectivos invocados por quien las ejercita sean las de los consumidores, categoría que la misma ley define en el artículo 1 N°1 como “las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico



oneroso, adquieren, utilizan, o disfrutan, como destinatarios finales, bienes o servicios. En ningún caso podrán ser considerados consumidores los que de acuerdo al número siguiente deban entenderse como proveedores”, y que debe ser complementada con las disposiciones contenidas por la Ley 20.416, conforme con la cual, en su artículo 9, se protege también el rol de consumidoras de las micro y pequeñas empresas, de manera tal que les son aplicables a los actos o contratos que celebren las normas de la Ley 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.

La anterior constituye, como se advierte, una exigencia que dice relación con el grupo de personas cuyos intereses se persigue tutelar con las acciones colectivas y cuya concurrencia abstracta sirve de presupuesto para la aplicación, por especialidad, de la Ley del Consumidor.

Sexto. Que, en el presente caso, y como establece el fallo, la parte demandante no logró demostrar la concurrencia de una relación de consumo que pudiera justificar la aplicación del estatuto especial de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, en la medida en que aquellas personas que dice, pretendidamente afectadas por el producto importado, distribuido, comercializado o vendido por las demandadas, no revisten la mencionada calidad, en la medida en que no son destinatarios finales de esos bienes, ni han celebrado con el proveedor contratos onerosos en razón de los cuales los hayan adquirido, utilizado o disfrutado.

Séptimo. Que así resulta de la propia demanda deducida por ODECU, quien al referirse a los miembros del colectivo cuyo interés representaría en juicio, señala que son “chilenos diagnosticados con cáncer NHL que han trabajado en labores agrícolas, frutícolas y silvícolas, en cada uno de los cultivos indicados en el capítulo II.3 anterior”, así como de la restante prueba rendida, de la que no resulta demostrada la exigencia de destinatarios finales de los referidos productos quienes, en consecuencia, pudieran ser calificados como consumidores final.

Octavo. Que tampoco resultaría procedente en relación con empresas de menor tamaño, las que tienen un estatuto especial en la Ley 20.416, que no faculta a ODECU para comparecer en su representación, en la medida en que, como resulta de lo dispuesto por el artículo 9 de la referida normativa “En caso de existir un grupo de micro o pequeñas empresas que cumplan con los requisitos establecidos por la ley N°19.496, podrán interponer acciones



colectivas en los términos de los artículos 50 y siguientes del mismo cuerpo normativo, sin perjuicio de lo señalado en el numeral 2) del presente artículo. También podrán iniciar dichas acciones, en representación de sus afiliados, las entidades de carácter gremial que los agrupen”.

Noveno. Que de acuerdo con lo que se viene razonando, la sentencia en análisis concluye acertadamente que no concurren las exigencias para aplicar la Ley N° 19.496; y, en consecuencia, procedía acoger la excepción de legitimación activa invocada por los demandados.

Que, no es efectivo que la sentenciadora exigiere la individualización de una o más personas concretas ni tampoco un contrato entre las demandadas y los consumidores, ni tampoco un daño específico demostrado, como parece entender ODECU, sino que se demostrara si concurrían, en esa hipótesis, en concreto quienes, al menos de manera determinable, ocuparan la posición de consumidores; y, en relación con los cuales fuera posible reconocer la existencia de una relación de consumo.

Décimo. Que, en segundo lugar, la recurrente alega que la sentencia yerra al exigirle la demostración de un daño concreto a consumidores en esta etapa, lo que sería contrario a las exigencias y forma de tramitación de esta ley.

Undécimo. Que, hasta para desestimar la improcedencia de esa alegación con examinar la sentencia que se recurre, en la que no se advierte que se impusiera a la recurrente la mencionada carga.

En los términos que ya se han visto, la acción impetrada se desestimó por la falta de acreditación de la existencia de una relación de consumo subyacente que hiciera procedente la aplicación del estatuto especial contenido en la Ley 19.496, y no por la ausencia de daño, sin perjuicio que la sentenciadora, -a mayor abundamiento de su razonamiento principal-, considerara que no se han demostrado los fundamentos de fondo de la acción impetrada dentro de los que se encuentra el daño; lo que pone en evidencia que el vicio denunciado no solo no resulta existente, sino que no ha tenido influencia alguna en lo dispositivo de la sentencia.

Duodécimo. Que finalmente, en cuanto al recurso de Bayer, que pide que se declare como temeraria la acción deducida por ODECU, en atención a que la demanda intentada carecería de fundamento plausible; y, que además habría sido deducida de mala fe, no podrá prosperar.



Ello pues las razones por las que pueden realizarse ambas calificaciones –carente de fundamento plausible y de mala fe– dicen relación con circunstancias que deben ser apreciadas ex ante, vale decir, al momento de intentar la acción, no pudiendo estimarse concurrentes por la sola circunstancia que la acción intentada haya sido desestimada.

Por lo demás, la falta de plausibilidad, lo mismo que la mala fe, sancionan una litigación abusiva, la que solo resulta posible de apreciar en base a hechos concretos que deberán ser demostrados por quien lo alega, lo que no resulta del análisis de los antecedentes que constan en los presentes autos.

Y vistas las normas precitadas además de la demás contenidas en la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores:

I.- **Se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por ODECU en contra de la sentencia de veintiuno de julio de dos mil veintitrés.

II.- **Se confirma, sin costas**, la resolución apelada dictada con fecha veintiuno de julio de dos mil veintitrés por el 22° Juzgado Civil de Santiago.

Se previene que la abogada integrante María Soledad Krause Muñoz concurre a la decisión contenida sin compartir lo señalado en el Considerando Noveno que antecede, y teniendo en cambio presente lo siguiente:

1. Que es un hecho que no ha sido controvertido y que, en cualquier caso, resulta demostrado con el mérito de la prueba rendida que el uso y comercialización de los productos Roundup se encuentra autorizada en nuestro ordenamiento jurídico, y mantiene todavía, a esta fecha, la referida autorización;

2. Que la existencia de las referidas autorizaciones determina que, al menos de manera ex ante, los riesgos derivados de la comercialización y el uso del referido producto han sido permitidos, lo que se ha efectuado tras un proceso de evaluación seguido ante la autoridad competente, y con base en las evidencias existentes;

3. Que, de los antecedentes proporcionados, aparece que los permisos otorgados lo fueron bajo determinadas condiciones de advertencia y publicidad que fueron cumplidas por los proveedores, de manera tal que resulta aplicable en la especie el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 19.496, cuyo inciso final dispone que: “Con todo, se eximirá de la



responsabilidad contemplada en el inciso anterior quien provea los bienes o preste los servicios cumpliendo con las medidas de prevención legal o reglamentariamente establecidas y los demás cuidados y diligencias que exija la naturaleza de aquellos”;

4. Que tampoco se ha rendido en autos prueba suficiente con el objeto de demostrar que se han planteado en concreto otros riesgos por el uso o comercialización de ese producto que sean diversos de aquellos que fueron considerados al momento de otorgar o renovar las autorizaciones, u otras circunstancias que permitan demostrar que ellas fueron obtenidas de una manera indebida;

5. Que la sola circunstancia de que el glifosato haya sido considerado como probablemente cancerígeno por la Agencia Internacional para Investigaciones sobre Cáncer el año 2015 no resulta suficiente para dar por establecida la potencialidad cancerígena del referido producto, no habiéndose aportado otros antecedentes técnicos y científicos que sirvan para afirmarlo en concreto con el estándar de prueba aplicable a procedimientos de esta naturaleza. Tampoco lo es que otros países hayan decidido prohibir o restringir productos con el referido componente; o que en Estados Unidos se hayan judicializado casos en contra de Bayer; particularmente porque no se han aportado pruebas que permitan concluir que los antecedentes tenidos a la vista para la adopción de las referidas decisiones resultan también aplicables a los casos seguidos ante nuestro país que son objeto del presente procedimiento.

Redacción de la abogada integrante María Soledad Krause Muñoz.

Regístrese y comuníquese.

Civil N°13.492- 2023.

No firma la ministra (s) Sra. Orellana, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QCCLXUTFYMX

Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Marisol Andrea Rojas M. y Abogada Integrante Soledad Krause M. Santiago, diecisiete de abril de dos mil veinticinco.

En Santiago, a diecisiete de abril de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QCCLXUTFYMX